

Revista No. 070 - 8 de enero de 2007

Editorial

LOS RETOS PARA EL 2007

En este 2007 los colombianos debemos continuar en la lucha por avanzar con paso firme en la superación de las insatisfacciones que nos agobian. El EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL persiste en este propósito: la búsqueda de la paz con soberanía, justicia y bienestar.

Para avanzar de manera cierta en dicha dirección hay que enfrentar grandes retos, asumir los problemas represados y encarar la crisis de la república "narcoparamilitar", que se hizo pública con el destape de la "parapolítica".

Este escándalo que pone en evidencia el agotamiento del modelo de dominación, oligárquico y pro imperialista, es resultado de sus propias contradicciones, la corrupción y la injusticia social que generan éstos. Ante dicho escándalo los dueños del poder buscan concertar salidas a la crisis, focalizando la responsabilidad en sectores del poder legislativo y en individualidades, para tapar la verdad están intentando hacer viable una ley de punto final para impedir que las investigaciones lleguen al fondo y encubrir a los verdaderos responsables de la guerra sucia y del desastre del país.

Por esa vía de impunidad y maniobras políticas pretenden salvar la "institucionalidad" y recomponer la gobernabilidad resquebrajada.

El reto es oponerse a este tipo de salidas exigiendo que se destape toda la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas, que nunca más se repita el genocidio. Es necesario y urgente presionar de distintas formas y en diversos escenarios para que se conozcan ya todos los crímenes y daños causados y no esperar tres o más décadas para conocer la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del medio millón de asesinatos, los cuatro millones de desplazados y la contrarreforma agraria que ha despojado a los campesinos de alrededor de cinco millones de hectáreas.

Un reto es luchar para que las grandes mayorías de la nación se conviertan en la fuerza protagónica organizada, en movimiento con conciencia de ser poder, capaz de concretar la ruptura con el viejo país y tejer uniones indisolubles y alianzas con quienes estén dispuestos a luchar para producir los cambios y construir un mejor futuro para todos los colombianos.

Es enfrentar la crisis luchando por la renovación de las instituciones: un Ejecutivo, un Congreso, unas Fuerzas Armadas y un poder Judicial depurados, es decir, eliminar la estructura terrorista del Estado y el narco paramilitarismo.

Es la construcción de nuevo régimen político de profundo contenido democrático, que cancele la deuda social, respete íntegramente los derechos humanos, pare el genocidio, lidere la abolición de las leyes antipopulares y lesivas al interés nacional y le abra paso a una Nación con Paz y Equidad.

Un reto es la denuncia de la corrupción y del régimen antipatriótico por parte de los parlamentarios sensibles al interés nacional y a los reclamos de las grandes mayorías, que además salgan a la calle y lideren a las masas insatisfechas. Igual deben hacer los líderes sociales y políticos…. Todos a la calle a hacer sentir el poder del pueblo, a hacer respetar la soberanía popular y luchar por constituir un nuevo gobierno.

Otro de los retos es luchar por concretar un acuerdo humanitario sobre prisioneros, como un paso para crear el ambiente para la paz y vincular la sociedad colombiana a este propósito.

Todos a luchar con decisión y firmeza para convertir en propósito nacional la construcción del nuevo país mediante la confrontación del modelo de dominación capitalista que genera desigualdad social, antidemocracia, corrupción, dependencia colonizadora y se apuntala en el terrorismo de Estado para mantener el poder.

Resolver el conflicto social y armado debe ser convertido en prioridad nacional pues es un paso hacia la construcción de la paz real, estable y duradera fundamentada en la justicia social.

Una paz sin transformaciones profundas que eliminen el modelo de dominación, es un engaño para que el país siga peor, rumbo al desastre total.

Superar las insatisfacciones represadas de las mayorías nacionales, resolver la crisis yendo al fondo de las causas con salidas alternativas de nueva gobernabilidad y construir la paz, son las máximas tareas que el pueblo como fuerza protagónica, debe asumir en este 2007.

Nuestra organización ratifica la voluntad que tenemos de trabajar con la sociedad colombiana, aportando nuestros mejores esfuerzos en la construcción de la paz entendida como proceso real, como respuestas ciertas a los problemas que afligen a las grandes mayorías nacionales. Reafirmamos y clarificamos, una vez más, que le apostamos a la paz y no a la caricatura de paz.

El Comando Central del ELN saluda a los hombres y mujeres colombianas e invita a que en este año demos pasos sólidos y nos fundamos en el propósito de construir la NUEVA COLOMBIA, donde quepamos y podamos vivir en paz y con dignidad, todos.

Coyuntura Nacional

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

A propósito del escándalo narcoparapolítico, que vincula a procesos judiciales a varios funcionarios y congresistas, algunos intelectuales y analistas se han dado a la tarea de argumentar que “el país no aguanta toda la verdad” y que ésta sólo debe ser conocida después de varias generaciones.

De inmediato surge la pregunta ¿a cuál país se refieren estos defensores de oficio del establecimiento? Por supuesto que se trata de todas las instituciones, gremios y personas que están comprometidas con el genocidio cometido contra el pueblo colombiano, a lo largo de las últimas décadas.

Porque la verdad es que el Estado colombiano, acatando las directrices del imperialismo estadounidense, ha venido aplicando la doctrina de la Seguridad Nacional y el terrorismo de Estado para neutralizar el descontento social que genera su sistema de dominación y explotación, y para tratar de aniquilar el movimiento guerrillero que lucha por la liberación nacional y por la construcción de una patria socialista.

De acuerdo a esa doctrina, se vuelve política oficial el aniquilamiento de los sectores de oposición y de toda la población que las fuerzas armadas sospechen que le puede servir de apoyo a las organizaciones insurgentes. Para desarrollar esta Guerra de Baja Intensidad se ordena realizar todo tipo de barbaries utilizando las tropas regulares, pero de manera encubierta y creando los ejércitos de sicarios (paramilitares), que aunque sean orgánicos a las Fuerzas Armadas del Estado, aparezcan como grupos autónomos y al servicio de diferentes sectores particulares.

Para financiar esta Guerra Sucia se tiene que acudir a medios extralegales, en donde ha sido significativa la generosa colaboración de los diferentes gremios económicos (aunque ahora sólo son los ganaderos los que tienen el orgullo de reconocerlo), pero principalmente se ha utilizado la altísima rentabilidad del narcotráfico. Así, de la mano de la DEA y de la CIA, el Estado colombiano entra a cooptar los diferentes carteles de narcotraficantes, para ponerlos al servicio de la guerra contrainsurgente.

Esta simbiosis entre paramilitarismo y narcotráfico, arropados bajo el manto estatal, ha producido la más tenebrosa maquinaria de exterminio y dominación, que comenzó aniquilando a los dirigentes populares y activistas de izquierda y terminó adueñándose de la economía, la política, las administraciones públicas y hasta de las formas de vida en las regiones. Luego han venido penetrando las tres ramas del poder público nacional y controlando todo el andamiaje estatal.

Esa es la verdad, que el Estado colombiano es el responsable del genocidio, que en las últimas tres décadas ha generado más de medio millón de asesinatos. En esta guerra de exterminio están comprometidos los altos funcionarios gubernamentales, los principales mandos del ejército, de la policía y de los organismos de la inteligencia estatal, los dueños de los principales grupos económicos y de las empresas multinacionales, los narcotraficantes, los partidos políticos tradicionales, los ejércitos de criminales (oficiales y paramilitares), con todos sus batallones de testaferros políticos, jurídicos y económicos.

¿ES POSIBLE APLICAR LA JUSTICIA?

Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si estamos siendo regidos por un Estado mafioso y con rasgos fascistas, controlado por la extrema derecha, compromisoria con el narcotráfico y el paramilitarismo, donde son los propios criminales los que hacen las leyes a su conveniencia y son ellos mismos los encargados de aplicar su "justicia", es de sentido común que no se van a auto-castigar. Cuando mucho, llevarán al altar de los sacrificios a algunos chivos expiatorios, para calmar la inquieta opinión pública.

Este es un Estado que se encuentra inhabilitado para castigar los crímenes cometidos por el mismo Estado. Ahora la justicia se halla secuestrada por los delincuentes.

El mismo Ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, le declaró a la prensa: "El Estado no indemnizará a víctimas de paramilitares... porque no sería justa para las próximas generaciones. Las generaciones futuras no tendrían Estado y éstas no tienen por qué pagar errores del pasado". Esta es la forma cínica como el Estado elude la aplicación de la justicia.

Claro que no todos los funcionarios públicos y más en concreto de la rama judicial reciben sobornos, ni hacen parte de las filas de los narcoparamilitares y es por esto que ha logrado trascender el reciente escándalo.

Pero estamos lejos que la justicia pueda aplicarse sin la intimidación de estos escuadrones de la muerte. Aún es necesario recorrer un doloroso camino para que en Colombia depuremos los organismos judiciales, para que los criminales de guerra puedan ser castigados de acuerdo a la legislación internacional que tipifica los crímenes de lesa humanidad y no con la benevolencia de la ley 975 y la ley de Tierras que absuelve a los narcoparamilitares y les legaliza el botín usurpado en la guerra.

Por tanto, es la movilización popular la encargada de no dejar en la impunidad los crímenes de Estado y evitar que se apliquen la ley de punto final o también llamada de perdón y olvido.

Por eso, todos los millones de víctimas debemos generar un gran movimiento para judicializar todos los delitos y crímenes y exigir la aplicación de la justicia ya. Las víctimas del terrorismo de Estado no sólo exigimos que se conozca toda la verdad ahora mismo, sino que se castigue a todos los culpables.

¿CUÁNTA REPARACIÓN?

Los medios de prensa han venido dejando filtrar informaciones de los procesos judiciales que evidencian cómo el narcoparamilitarismo se aplicó en todo el país, en las pasadas elecciones, para imponer sus candidatos a sangre, fuego y dinero. Así obtuvieron las mayorías en el Congreso, eligieron presidente y tomaron el control de varios departamentos y muchos municipios. Eso significa que esas elecciones fueron fraudulentas, deben anularse y convocar inmediatamente a otro proceso eleccionario, donde se brinden las garantías democráticas.

Todos los partidos políticos que le dieron cobijo a esos narcoparamilitares deben perder la personería jurídica.

Igualmente deben derogarse todas las leyes que han sido aprobadas por esos cuerpos legislativos, mayoritariamente mafiosos y criminales.

Todos los dineros expropiados de las administraciones públicas deben ser devueltos.

Deben ser excarcelados los miles de detenidos políticos, injustamente acusados de guerrilleros por habitar en “zonas rojas” o por ser dirigentes o activistas sindicales o populares. Además, deben ser indemnizados por daños y perjuicios.

Deben ser devueltas las cerca de 5 millones de hectáreas expropiadas a los desterrados y el Estado debe comprometerse con la financiación de efectivos planes de desarrollo regionales en las zonas desalojadas. Además, deben ser devueltas todas las propiedades y bienes usurpados por los narcoparamilitares.

El Estado debe asumir la responsabilidad por todas las víctimas del paramilitarismo e indemnizar a sus familiares.

La reparación política implica un proceso de transformación del Estado y de construcción de Nación, en donde se renuncie al terrorismo y a la Guerra Sucia, como instrumentos de control y se depure de las Fuerzas Armadas, a todos sus ideólogos, gestores y auspiciadotes. Sólo así podrá acabarse con el paramilitarismo.

Coyuntura Nacional

LAS CIFRAS DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

El año 2006 marcó un agravamiento en la situación de los derechos humanos para nuestro pueblo, que sigue resistiendo a la sistemática agresión de las Fuerzas Armadas gubernamentales y de los paramilitares.

En contravía a lo manifestado por el gobierno de Uribe, en el sentido de que con la desmovilización de los paramilitares se daría una disminución de los crímenes, del desplazamiento, de las desapariciones, las detenciones y las masacres, estos han aumentado y llegado a niveles semejantes a los registrados durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala.

Para esos años, década de los 80, el reporte de las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos fue el siguiente:”desde 1988, en promedio diariamente son asesinadas siete personas por razones políticas. La mayoría de los asesinatos políticos son cometidos por miembros de la Fuerza Pública y de los cuerpos de seguridad del Estado y por grupos paramilitares”.

Esta tendencia se mantiene y amplía durante el gobierno de Uribe. El informe de las organizaciones de Derechos Humanos de Colombia y Estados Unidos que trabajan en coordinación, lo confirma.

1. “El periodo comprendido entre julio del 2002 a junio del 2006, el primer cuatrienio de la administración Uribe, fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate y a consecuencia de la violencia social y política un total de

11.084 personas. En promedio cada día fueron asesinadas o desaparecidas 7.7 personas. Cada año fueron asesinados o desaparecidas un número aproximado de 3.145 personas". (1).

2. En cuanto a los responsables, el mismo informe señala que "el 74,5% de las muertes y desapariciones producidas fuera de combate es atribuible al ESTADO, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico. Por perpetración directa de agentes estatales, el 12,1% (752 víctimas) y por tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares, el 62,4% (3.887 víctimas). Así mismo, las guerrillas habrían sido autoras del 25,5% (1.588 víctimas) de las muertes y desapariciones."

3. Es de resaltar que los grupos paramilitares continúan siendo los mayores violadores del derecho a la vida durante el primer cuatrienio del mandato de Álvaro Uribe Vélez. "Entre julio de 2002 y junio de 2006, esos grupos asesinaron o desaparecieron forzadamente a 972 personas cada año, en promedio. Entre julio de 1998 y junio de 2002, los grupos paramilitares asesinaron o desaparecieron cada año, en promedio, a 1.950 personas. A pesar del cese de hostilidades que pactaron con el gobierno, entre el 1° de diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2006, por lo menos 3.002 personas fueron asesinadas o desaparecidas por grupos paramilitares."

Las cifras podrían ser mucho más altas, si se tiene en cuenta que tan sólo el frente José Pablo Díaz, bajo el mando de 'Jorge 40' y perteneciente al Bloque Norte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), habría perpetrado 558 asesinatos, entre 2003 y 2005, en un municipio de Magdalena, 17 municipios de Atlántico y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla".

4. Las detenciones masivas se han convertido en una práctica generalizada, masiva y sistemática, pues durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron detenidas arbitrariamente. Eso significa que cada día, en promedio, fueron detenidas arbitrariamente casi cinco (4,7) personas.

5. Las amenazas se han generalizado en todo el país como una forma de silenciar, atemorizar y propiciar el destierro de líderes sociales. En el mes de diciembre del 2006 en Cartagena y Barranquilla circularon amenazas masivas a más de 80 líderes a nombre de las "Águilas Negras", estructuras paramilitares creadas al amparo del Ejército en todo el país quienes se encargan de hacer misiones sucias. (2).

6. No para el desplazamiento. Según CODHES, los habitantes de Nariño y Putumayo, al sur del país, son los más afectados por esta crisis humanitaria, de igual manera es dramático y alarmante el desarraigo que padecen las zonas de fronteras nacionales con Ecuador, Venezuela y Panamá.

En todo el país, del 1 de enero al 31 de mayo del 2006, 10 mil 567 personas, que integran 2 mil 113 familias se desplazaron. En lo corrido del año, el 8,6% de los desplazados fueron pueblos indígenas, algunos de los más afectados fueron los Nukak Makú en el departamento de Guaviare, los Wounnan en Chocó, los Awa en Nariño, los Wuayúu en La Guajira y los Paeces en Cauca.

Los desplazamientos masivos también tocaron a comunidades afro descendientes, campesinos y colonos en Chocó, Bolívar, Antioquia, Meta, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

Las víctimas del terrorismo de Estado.

Ningún sector social ha escapado a la acción represiva y criminal de los aparatos militares y paramilitares del Estado. Aunque en sus discursos desde la presidencia de la República argumente Álvaro Uribe que la “seguridad democrática” está destinada a combatir a la insurgencia y trate de convencer de ello al país, lo cierto es que el grueso de esa política ha sido dirigida hacia la población, a golpear a los movimientos populares y de izquierda, a sectores de la oposición política, a los pueblos indígenas y afro descendientes, entre otros.

Dentro de los 11.084 asesinatos y desapariciones cometidas por las fuerzas del Estado y los paramilitares se encuentran concejales, candidatos a las alcaldías y corporaciones legislativas municipales y departamentales que se opusieron al control político y económico de los paras, tal como aconteció en los departamentos del Magdalena y Cesar donde fueron asesinados todos los aspirantes a la gobernación, menos los candidatos proclives a los narcoparamilitares. (3).

De esta incompleta estadística de asesinatos y desapariciones hacen parte los cientos de pobladores y líderes de los pueblos y movimientos indígenas que luchan por reestablecer la propiedad ancestral de la tierra y defender su territorio de la invasión de las compañías multinacionales del petróleo y demás recursos naturales. Todavía está en nuestras retinas el infame ataque a la marcha pacífica de los indígenas el 12 de octubre del 2005 a raíz de la Cumbre Itinerante Nacional.

En estos datos podemos contar los más de 30 campesinos asesinados por las brigadas del ejército en Antioquia, que luego de matarlos fueron vestidos con prendas militares para hacerlos aparecer como "guerrilleros dados de bajas" en combate.

En el Sur de Bolívar está reciente el asesinato del líder minero Alejandro Uribe, cometido por el ejército en las minas de la Serranía de la San Lucas y cuyo cadáver fue presentado en los medios de comunicación como el de un guerrillero del ELN. A este líder el ejército le cobró el hecho de haberlo denunciado como violador de los derechos humanos en la región, en la “Audiencia sobre Minería, Multinacionales y Fuerzas Armadas” realizada en abril del 2006 en Medellín. (4).

Los jóvenes ha sido uno de los sectores sociales más golpeados por la violencia de los paramilitares, con la participación y complicidad del Estado, en lo que parece ser una estrategia de exterminio de la generación del futuro.

Es evidente que en el Pacífico colombiano se viene adelantando un proceso de violencia orquestado por algunas empresas, los narcotraficantes disfrazados de paramilitares y agentes del Estado. Dicho plan puede decirse que está dirigido a arrasar con los jóvenes de la región, prueba de ello es lo sucedido en los últimos años en municipios como Buenaventura, donde entre el 2000 y 2005 se registraron 2.644 homicidios, de los cuales el 70% corresponde a jóvenes. Este

año el observatorio del delito de la alcaldía reseña 299 asesinatos, un 85% de las víctimas no superan los 35 años de edad. (5).

En Puerto Tejada, una asamblea de jóvenes afro descendientes denunció que en este municipio norte caucano, que no pasa de los sesenta mil habitantes, ha visto morir violenta e impunemente a más de mil jóvenes entre los 12 y los 24 años, lo cual es un claro indicativo de que el accionar paramilitar va dirigido a exterminar la generación de futuro.

En ciudad Bolívar, una populosa barriada de Bogotá, capital de la República de Colombia, los jóvenes vienen trabajando por la realización de un Tribunal de Opinión Internacional o audiencia pública para hacer visible el genocidio y condenar moralmente a los responsables. Las organizaciones sociales denuncian que "los jóvenes son recogidos por la Policía en un camión conocido como 'La perrera', trasladados a la Unidad Permanente de Justicia, (UPJ), allí los detienen 24 horas, son bañados y golpeados con un palo que tiene escrito 'Derechos Humanos" según una de las cientos de denuncias de jóvenes de dicha comunidad.

De octubre de 2005 a mayo de 2006, han sido asesinados más de 550 jóvenes en Ciudad Bolívar. Las AUC cuentan con listas de los líderes de la comunidad y de organizaciones sociales, que han sido declarados objetivo militar. (6).

Los paramilitares que se movilizan "como Pedro por su casa" en Ciudad Bolívar, han publicado panfletos condenando a la muerte a los jóvenes: "Los niños buenos se acuestan a las nueve y los que no los acostamos".

También es conocida la forma como actúan en una parte del barrio Alpes, paramilitares desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de Medellín.

Los trabajadores han visto caer asesinados a cientos de activistas y dirigentes en estos cuatros años de gobierno Uribista. Sin lugar s dudas es la manera en que este gobierno penaliza las luchas que los trabajadores realizan para defender el patrimonio nacional, como aconteció con la muerte de maestros, dirigentes petroleros y otros.

Los protagonistas de la guerra sucia, con un nuevo disfraz autodenominado "Águilas Negras", hacen listas macabras de las víctimas y emiten amenazas refrendadas por el propio vicepresidente de la república, quien irresponsablemente señala la dirigencia sindical de ser guerrilleros, o sea da el visto bueno para que sean asesinados.

Miembros de los partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista y el Polo Democrático, han sido asesinados en el desarrollo de su actividad de oposición y lucha social a lo largo y ancho del país.

En los dos años pasados, en la región fronteriza con Venezuela ocurrió el mayor número de asesinatos políticos.

También en esa región han ocurrido las más terribles masacres. En Bahía Portete, departamento de la Guajira (al norte del país), fueron despedazados 32

indígenas Wayúu y en Arauca (al centro oriente), fueron degollados 13 campesinos. Además se incrementa notablemente la militarización por tierra y aire del poblado de Cubará, con el pretexto de imponer a los indígenas U'Wa la explotación del petróleo existente en su territorio, por parte de empresas transnacionales.

En este cuatrienio ha sido violento y brutal el comportamiento de la fuerza pública y en especial de la Policía Nacional a través de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el cual ha cobrado la vida de numerosos estudiantes, indígenas y luchadores sociales.

Las detenciones masivas a líderes de los movimientos sociales y políticos, quienes son presentados como guerrilleros, es otra de las modalidades de persecución política desatada por el régimen uribista en su afán de presentar un balance favorable en la lucha contra la insurgencia. Pasado un tiempo, estos líderes, son exonerados de los cargos, pero se ha logrado descabezar a los movimientos sociales y propagar el espejismo de la eficacia de la "seguridad democrática".

En los operativos contra la guerrilla que realiza el ejército de Colombia, se ha vuelto costumbre llevar como guía a campesinos que son obligados a hacerlo so pena de ser acusados de colaboradores de la insurgencia, de esta manera se les priva de la libertad de manera ilegal.

El actual gobierno también ha penalizado y criminalizado la paz. En nuestro país centenares de comunidades vienen construyendo distintos procesos para aportar a la construcción de ese anhelo.

La comunidad de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, desde hace años se ha declarado comunidad de paz y para ello adelanta varios programas de derechos humanos, de producción agroalimentaria y de soberanía frente al conflicto armado. Sin embargo, sus actividades han sido criminalizadas y el hostigamiento del ejército, que los señala como colaboradores de la guerrilla, es permanente, esto le ha costado la vida a muchos de sus pobladores ya sea porque han sido asesinados o por el bloqueo económico a la comunidad, cercada militarmente y amenazada permanentemente por los grupos paramilitares.(7).

Los procesos comunitarios por la vida y la paz del Sur de Bolívar, igualmente sufren las amenazas y asesinatos del ejército. Los diálogos comunitarios han sido estigmatizados colocando en grave riesgo la seguridad de los pobladores, mineros y campesinos de los municipios de Santa Rosa, San Pablo, Morales y Puerto Rico. Varios líderes del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio han sido asesinados por los paramilitares.

Julián Hurtado en su intervención durante la marcha que se hizo el pasado septiembre en Cali por el aniversario del crimen del estudiante Johnny Silva en el 2005, propuso que las universidades fueran declaradas territorios de paz y que el papel de la universidad es colocarse al frente de este anhelo de los colombianos. Un mes después, Julián fue asesinado llegando a su casa. Por esta clase de actos los universitarios reclaman que los suyos sean "territorios de paz".

Estos relatos sirven para ilustrar lo que está pasando en Colombia: la imposición de un régimen de terror, genocida y mafioso.

Para construir la paz se necesita crear un ambiente para que puedan participar las mayorías.

El ELN está convencido de la necesidad de una solución política al conflicto social, político y armado, con la participación de toda la sociedad en el diseño de un nuevo país. A este derecho de los colombianos se atraviesa la permanente la práctica del genocidio y la persecución política a una parte sustantiva de la sociedad, a sus mayorías populares.

Un salto en los diálogos por la paz requiere de generar un ambiente. Para ello deben cesar los asesinatos, las desapariciones, el tratamiento terrorista a las luchas sociales, las amenazas, las detenciones arbitrarias masivas y selectivas, es decir, se requiere la desactivación de todos los factores que inhiben la participación popular. Es el reto.

Fuentes:
1. Ver informe Coordinación organizaciones de derechos humanos Colombia-Estados Unidos.
2. Periódico El Universal de Cartagena; Diario El Heraldo de Barranquilla del 16 de diciembre.
3. El Alcalde de El Roble es recordó porque en un Consejo Comunitario donde asistió el presidente Uribe denunció la amenaza de muerte y pidió protección. Un mes después fue asesinado.
4. Ver comunicado de la Federación Agrominera fechado el día 28 de septiembre.
5. Denuncia presentada en el encuentro de jóvenes afro descendientes en Puerto Tejada, realizado los días 23 y 24 de noviembre, 2006.
6. Denuncia de las organizaciones sociales de Ciudad Bolívar, el delito de ser joven, mayo 25 del 2005.
7. Intervención del Sacerdote Jesuita Javier Giraldo en el congreso de la República.

Identidad Elena

VIGENCIA DEL ALZAMIENTO ARMADO

En el 41 aniversario de la primera toma guerrillera a una población, realizada por el ELN, es imprescindible proponer al país la reflexión sobre la vigencia del alzamiento armado revolucionario, que hace más de cuatro décadas, iniciamos tanto las FARC, como el ELN.

Un siete de enero

A la población santandereana de Simacota, llegó un puñado de guerrilleros elenos y en pocos minutos de combate dominaron la guarnición policial, además de combatir con los refuerzos enviados por el ejército, desde el cuartel de El Socorro. Era un jueves 7 de enero de 1965.

La oligarquía monopolizaba el gobierno e impedía por ley que fuerzas populares le disputaran tal monopolio. Por su aparte el imperio norteamericano invadía los países a su antojo e imponía gobiernos militares, con la excusa de defender sus intereses.

Años más tarde, la elite además de tales leyes acudió al genocidio para eliminar a la oposición. Al tiempo los estadounidenses elevaron a la categoría de doctrina, el concepto de que el pueblo es el enemigo interno a combatir en cada país, por medio de Guerras de Baja Intensidad.

¿Qué fue primero?

En 1962 el presidente de Estados Unidos, J. F. Kennedy asumió como arma principal la guerra contrainsurgente. De inmediato llegó a Colombia la primera misión de las Fuerzas Especiales de esa potencia, con la tarea de conformar grupos paramilitares, destinados a desaparecer comunistas y a todo aquel que se les opusiera.

Dos años más tarde nacieron las FARC, para resistir los ataques de que fueron objeto por parte de los norteamericanos, con su Plan LASO (Latin American Security Operation). Ese mismo año de 1964 nacimos como Ejército de Liberación Nacional, ELN, producto de las luchas de resistencia antiimperialista y anti oligárquica que libraban los obreros, campesinos, estudiantes y el pueblo en general.

Hoy se afirma que la insurgencia revolucionaria justificó al régimen el uso del terrorismo de Estado para defenderse, pero como en el conocido dilema del huevo y la gallina, es necesario preguntarse, ¿cuál es la causa y cuál la reacción?

Camilo Torres luchó por la toma del poder, por medio de organizar grupos populares de presión, pero el mismo militar encargado de asesinarlo, le advirtió del siniestro plan, por lo que debió incorporarse a la guerrilla del ELN. Entonces, ¿qué fue primero?

La Unión Patriótica se creó a partir de acuerdos de tregua con las FARC, pero este experimento de lucha política fue degollado por las élites. Entonces, ¿de qué lado está la voluntad política para dirimir las diferencias por medio de luchas no violentas?

Hoy cabe preguntarse si el imperialismo ha dejado de imponer sus intereses con las armas y si la oligarquía ya no se rige por una ética de privilegio y exclusión, que la lleva a sostenerse en el poder por medio del uso de todas las violencias.